

RECLAMO EN FASE PREJUDICIAL

ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO EN FASE PREJUDICIAL CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR POR INCUMPLIR LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3 (LITERAL I), 72, 76, 77, 104 Y 139 DEL ACUERDO DE CARTAGENA; 3, 13, 14, 15, 16 Y 33 DE LA DECISIÓN 837; 3 DE LA DECISIÓN 502; Y 4 DEL TCTJCA, MEDIANTE LA MEDIDA CONTENIDA EN LA NOTA VERBAL NÚMERO MREMH-SSRV-2026-0001-N DEL 1 DE ENERO DE 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

28 de mayo de 2026

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE ABREVIATURAS	4
I. ANTECEDENTES	6
II. CUESTIONES PRELIMINARES.....	8
III. REQUISITOS DE PROCEDENCIA DEL RECLAMO DE INCUMPLIMIENTO .	11
A. IDENTIFICACIÓN COMPLETA DEL RECLAMANTE	12
B. LA REPÚBLICA DE COLOMBIA ACTÚA CONFORME AL ARTÍCULO 24 DEL TRATADO DEL TJCA	12
C. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN CLARA DE LA MEDIDA QUE CONSTITUYE EL INCUMPLIMIENTO	13
D. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA QUE SON OBJETO DE INCUMPLIMIENTO.....	16
E. RAZONES POR LAS CUALES LA MEDIDA OBJETO DE RECLAMO CONSTITUYE UN INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA	16
IV. CONCLUSIONES	39
V. SOLICITUD	40
VI. PRUEBAS	41
VII. ANEXOS	41
VIII. NOTIFICACIONES.....	42

Bogotá D.C., 28 de mayo de 2026

Doctor

GONZALO GUTIÉRREZ REINEL

Embajador

Secretario General

SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

Lima, Perú

correspondencia@comunidadandina.org

Asunto: Acción de incumplimiento en Fase Prejudicial. Reclamo por Incumplimiento de los artículos 1, 2, 3 (literal i), 72, 76, 77, 104 y 139 del Acuerdo de Cartagena; 3, 13, 14, 15, 16 y 33 de la Decisión 837; 3 de la Decisión 502; y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia.

Referencia: Reclamo por Incumplimiento.

CARLOS ALBERTO ROJAS CARVAJAL, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 86.045.558 de Villavicencio, abogado titular y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional de abogado número 109.641 del Consejo Superior de la Judicatura, Jefe de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, en mi condición de apoderado de la República de Colombia, de manera respetuosa me dirijo a la Honorable Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelante SGCAN) con el fin de presentar el siguiente reclamo, en desarrollo de la fase prejudicial de la acción de incumplimiento, contra **la República del Ecuador** (en adelante Ecuador), en los términos que a continuación se señalan:

TABLA DE ABREVIATURAS

- [1]. Con la finalidad de brindar una mayor claridad en la lectura de este escrito, se establecen las siguientes abreviaturas:

Abreviatura	Significado completo
AC	Acuerdo de Cartagena.
CAN	Comunidad Andina.
Colombia	República de Colombia.
Ecuador	República del Ecuador.
D.A.	Decisión Andina.
Decisión 623	Mediante la cual se expide el Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento.
Decisión 502	Mediante la cual se regulan los Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) en la Comunidad Andina.
Decisión 837	Mediante la cual se sustituye la Decisión 399 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre Transporte Internacional de Mercancías por Carretera.
La Medida	Adoptada mediante la Nota Verbal número MREMH-SSRV-2026-0001-N del 1º de enero de 2026.
MINCIT	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
NFT	Negrilla fuera de texto.
NMF	Nación Más Favorecida.
Resolución 2590	Mediante la cual se resuelve la solicitud de la República de Colombia, sobre la calificación como restricción al comercio subregional y a la libre circulación de mercancías respecto de la habilitación controlada del paso fronterizo CEBAF San Miguel para el transporte de crudo colombiano, mediante un listado de personas y vehículos autorizados por la República del Ecuador.
TJCA	Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

TCTJCA	Decisión 472. Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
ETJCA	Decisión 500. Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
SFT	Subrayado fuera de texto.
SGCAN	Secretaría General de la Comunidad Andina.

I. ANTECEDENTES

[2]. El 1 de enero de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana – Subsecretaría de Soberanía y Relaciones Vecinales de la República del Ecuador expidió la Nota Verbal No. MREMH-SSRV-2026-0001-N (**PRUEBA 1**). A través de dicha comunicación, Ecuador notificó que autorizaba *"de manera excepcional la habilitación controlada del paso fronterizo CEBAF San Miguel, con el objetivo exclusivo de garantizar la continuidad del transporte de crudo colombiano hacia la Estación de Bombeo Amazonas"*, limitando el tránsito y condicionando la importación únicamente a un listado anexo de personas y vehículos autorizados por su gobierno.

[3]. En extenso, mediante la referida Nota señaló lo siguiente:

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana – Subsecretaría de Soberanía y Relaciones Vecinales – saluda atentamente a la Honorable Embajada de la República de Colombia y tiene a honra referirse a la Nota Verbal MREMH/MREMH/2025/0020/N de 24 de diciembre de 2025.

Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana – Subsecretaría de Soberanía y Relaciones Vecinales – tiene a honra informar que las autoridades competentes del Estado ecuatoriano han autorizado de manera excepcional la habilitación controlada del paso fronterizo CEBAF San Miguel, con el objetivo exclusivo de garantizar la continuidad del transporte de crudo colombiano hacia la Estación de Bombeo Amazonas, ubicada en la ciudad de Lago Agrio. Se adjunta el listado de personas y vehículos debidamente autorizados para el ingreso y posterior salida de territorio ecuatoriano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana – Subsecretaría de Soberanía y Relaciones Vecinales – hace propicia la ocasión para reiterar a la Honorable Embajada de la República de Colombia las seguridades de su más alta y distinguida consideración¹.

[4]. Al respecto, resulta pertinente señalar que la "Nota Verbal Nro. MREMH/MREMH/2025/0020/H de 24 de diciembre de 2025", a la que se hace mención establece lo siguiente: "(...) a partir del 24 de diciembre de 2025 se

¹ República del Ecuador. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Nota Verbal No. MREMH-SSRV-2026-0001-N del 1 de enero de 2026.

mantendrá habilitado únicamente El paso internacional ubicado Rumichaca, en la frontera ecuatoriano colombiana, como único paso internacional entre ambos países”.

- [5]. Esta medida fue implementada a pesar de que el Programa de Liberación de la CAN fue establecido en el Acuerdo de Cartagena (AC) para eliminar restricciones de todo orden, que afecten la comercialización de productos entre los Países Miembros.
- [6]. La medida recayó sobre el producto denominado, «crudo colombiano», identificado con la partida 2709 y clasificado en la subpartida NANDINA 2709.00.00 (aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso)².
- [7]. El 6 de febrero de 2026, la República de Colombia presentó ante la SGCAN una solicitud de calificación de restricción contra la referida medida, por considerarla contraria a los artículos 1, 2, 72, 73, 76, 77 y 139 del AC. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del mismo instrumento y en la Decisión 425 (Título V, Capítulo I, artículos 46 a 55). Dicha solicitud fue subsanada posteriormente mediante el radicado No. 2-2026-0045601 del 19 de febrero de 2026.
- [8]. El 24 de febrero de 2026, la SGCAN admitió a trámite la solicitud presentada por la República de Colombia y dispuso el inicio del procedimiento de investigación correspondiente.
- [9]. El 13 de abril de 2026, mediante documento fechado al 30 de marzo de 2026, la República del Ecuador presentó su informe técnico-jurídico justificativo de la medida **(PRUEBA 2)**.
- [10]. A través de escrito del 6 de mayo de 2026, la República de Colombia presentó sus observaciones respecto del informe técnico-jurídico justificativo de la medida allegado por la República del Ecuador **(PRUEBA 3)**.
- [11]. Agotado el procedimiento administrativo de investigación, el 14 de mayo de 2026 la SGCAN profirió la Resolución No. 2590, publicada en la Gaceta Oficial No. 5759 del Acuerdo de Cartagena **(PRUEBA 4)**, mediante la cual resolvió:

² Decisión 855. Aprobación de la Nomenclatura Común – NANDINA. Anexo. Disponible: https://www.comunidadandina.org/normativa-files/uploads/Gaceta_4359_d848f7904e.pdf

Artículo 1.- *Calificar, conforme a lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, que la medida que autoriza de manera excepcional la habilitación controlada del paso fronterizo CEBAF San Miguel, con el objetivo exclusivo de garantizar la continuidad del transporte de crudo colombiano hacia la Estación de Bombeo Amazonas, ubicada en la ciudad de Lago Agrio, y el listado de personas y vehículos debidamente autorizados para el ingreso y posterior salida de territorio ecuatoriano, contenida en la Nota Verbal Nro. MREMHSSRV-2026-0001-N del 1 de enero de 2026 y adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana - Subsecretaría de Soberanía y Relaciones Vecinales de la República del Ecuador, constituye una restricción al comercio subregional andino.*

Artículo 2.- *De conformidad con el literal e) del artículo 55 de la Decisión 425, la República del Ecuador deberá retirar la medida restrictiva establecida mediante la Nota Verbal Nro. MREMH-SSRV-2026-0001-N de 2026 adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana - Subsecretaría de Soberanía y Relaciones Vecinales de la República del Ecuador, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, debiendo informar del cumplimiento del presente artículo en el referido plazo³.*

- [12]. De conformidad con lo resuelto por la SGCAN mediante la citada resolución, el plazo concedido a la República del Ecuador para retirar la medida restrictiva establecida mediante la Nota Verbal Nro. MREMH-SSRV-2026-0001-N del 1 de enero de 2026 venció el pasado 28 de mayo, sin que esta se haya levantado.

II. CUESTIONES PRELIMINARES

- [13]. Conforme lo disponen los artículos 24 del TCTJCA y 13 de la Decisión 623, la acción de incumplimiento constituye el medio a través del cual, tanto la SGCAN -en desarrollo de los deberes que le han sido atribuidos por el Acuerdo de Cartagena- como los Países Miembros y las personas naturales y jurídicas, en la medida en que se vean afectadas por sus derechos, pueden reclamar que se garantice la observancia de los objetivos del proceso de integración de la CAN,

³ SGCAN. Resolución No. 2590 del 14 de mayo de 2026. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 5759.

por medio de la verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos por los Países Miembros.

- [14]. Entre los principios del proceso de integración andino se cuentan la igualdad, la justicia y la solidaridad, todos ellos dirigidos a lograr un desarrollo económico equilibrado, armónico y compartido, en condiciones de equidad. Estos objetivos se logran a partir de la integración y cooperación económica y social, propugnando por disminuir la vulnerabilidad externa del mercado subregional y haciendo posible una mejor posición económica de los Países Miembros en el contexto económico internacional, conforme a lo consignado tanto en el Preámbulo como en el artículo 1 (numerales 1 y 4) del AC.
- [15]. El Programa de Liberación de bienes (Capítulo VI del AC), ha sido considerado por el TJCA como un parámetro de primer orden para lograr integración subregional. Al respecto, el TJCA ha dicho lo siguiente:

Por virtud del programa de liberación (de bienes) regulado en el capítulo VI del Acuerdo de Cartagena, se han eliminado todos los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro⁴.

- [16]. De acuerdo con el artículo 76 del AC, el Programa de Liberación es automático e irrevocable. Al respecto el TJCA ha señalado:

[E]l artículo 76 de la misma norma establece que el Programa de Liberación es automático e irrevocable, y comprende la universalidad de los productos – se entiende que se refiere a los originarios de los Países Miembros –.

El Tribunal ha reconocido en su jurisprudencia la importancia del Programa de Liberación para la consolidación del proceso de integración subregional andino. En ese sentido se destacan las sentencias recaídas en los procesos 1-AI-97 y 01-AN-2014⁵.

- [17]. En el proceso 01-AN-2014, citando jurisprudencia previa, el TJCA reiteró que el cumplimiento del Programa de Liberación establecido en el Acuerdo de

⁴ TJCA. Sentencia del 28 de febrero de 2024. Proceso 60-IP-2020. Página 9. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/normativa-files/uploads/60_IP_2020_e951b714d2.pdf

⁵ TJCA. Sentencia del 16 de Junio de 2023. Proceso 01-AN-2017. Página 15. Disponible en: https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/AN/GOAC_5202_Proceso_01-AN-2017.pdf

Cartagena constituye un parámetro de primer orden para avanzar hacia la integración subregional andina⁶.

- [18]. En este sentido, el respeto por los objetivos establecidos en el AC constituye el elemento axiológico a partir del cual debe ajustarse la interpretación del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en este ámbito, y en caso de que se constate el incumplimiento de alguno de estos compromisos, le corresponde al sistema de solución de diferencias de la CAN garantizar la integridad del ordenamiento jurídico andino.
- [19]. La posibilidad de acudir a la acción de incumplimiento ante una violación del ordenamiento jurídico andino evita que medidas contrarias al AC causen el resquebrajamiento de la confianza depositada por los Países Miembros en las obligaciones establecidas en el AC, las cuales además deben ser honradas de buena fe⁷.
- [20]. Por estas razones, Colombia considera que el estudio de la presente acción de incumplimiento es fundamental para garantizar la integridad del ordenamiento

⁶ TJCA. Sentencia del Proceso 01-AN-2014. Página 47. Disponible en https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/PROCESO01_AN_2014.pdf

⁷ El artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados contempla el principio de *pacta sunt servanda*, en virtud del cual los tratados en vigor obligan a las partes y deberán ser cumplidos de buena fe. En este sentido, respecto del acuerdo de integración subregional, el TJCA ha recalcado lo siguiente: *"El postulado de la buena fe es esencial dentro de las relaciones jurídicas y económicas. Las partes en la vida de los negocios deben contar con la seguridad de que la confianza que tengan depositada en la persona con quien contratan, no puede quedar frustrada y que en caso contrario, quien resulte defraudado debe gozar de protección jurídica. La buena fe referida al cumplimiento de la obligación, lleva incorporados los elementos de fidelidad y compromiso de cooperación, como principios de ejecución contractual. (Betti Emilio, "Teoría General de las Obligaciones", citado por Hernando Gutiérrez y otros en "El Principio de la Buena fe en el Contrato de Seguros. Revista Universitas Bogotá, No. 76, junio de 1989.)... Aquí la confianza entre las partes se deriva del principio "Pacta Sunt Servanda", según el cual todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Este postulado consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), obliga a los Estados a la observancia de sus compromisos, que se amparan en la norma según la cual "una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado" (Artículo 27 de la Convención de Viena). Es bajo estos postulados como se compatibiliza el principio de la buena fe en las relaciones privadas de tipo internacional, con las obligaciones que adquieren los Estados en los procesos de internacionalización del derecho, como el del Acuerdo Subregional Andino. En la aprobación de los tratados, los Estados obran dentro de principios similares al de la autonomía de la voluntad que se manifiesta en los contratos entre particulares. De ahí que tanto las relaciones que entre aquellos se establecen, como las convenciones entre particulares deban estar presididas por la buena fe, para que lo que se estipuló al momento de contratar, pueda surtir realmente sus efectos y gozar de auténtica protección legal". (Proceso 2-AI-96, acción de incumplimiento interpuesta por la República de Venezuela contra la República del Ecuador, sentencia de 20 de junio de 1997).*

jurídico andino, ya que la medida objeto de litigio no tiene antecedentes en la historia de la CAN, y constituye un precedente que amenaza con desintegrar los esfuerzos que por más de 50 años han consolidado progresivamente el proyecto de integración andino.

- [21]. Con base en este entendimiento, a continuación, se procede a acreditar los requisitos de procedencia para la presentación del reclamo de incumplimiento en fase prejudicial.

III. REQUISITOS DE PROCEDENCIA DEL RECLAMO DE INCUMPLIMIENTO

- [22]. El artículo 14 de la Decisión 623, que establece el Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento, establece como requisitos para la presentación del reclamo los siguientes:

Artículo 14.- *El reclamo formulado por un País Miembro o por una persona natural o jurídica afectada en sus derechos deberá contener:*

- a) La identificación completa del reclamante;*
- b) La expresión de que actúa conforme al artículo 24 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando se trate de reclamos formulados por un País Miembro; o del artículo 25 cuando se trate de personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos;*
- c) La identificación y descripción clara de las medidas o conductas que el reclamante considera que constituyen un incumplimiento, acompañada de la información que resulte pertinente;*
- d) La identificación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina que estarían siendo objeto de incumplimiento;*
- e) Las razones por las cuales el reclamante considera que las medidas o conductas de un País Miembro constituyen un incumplimiento de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina identificadas;*
y,

f) En el caso de que el reclamante considere que el incumplimiento tiene el carácter de flagrante, las razones que sustenten dicha consideración. Cuando el reclamo sea presentado por un País Miembro deberá ser suscrito por la autoridad nacional competente para efectos de los procedimientos previstos en la presente Decisión o por quienes fueren acreditados por dicha autoridad (...)⁸.

[23]. Dichos requisitos son acreditados a continuación:

A. Identificación completa del Reclamante

[24]. El reclamo es presentado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), en representación de la República de Colombia, a través de su apoderado, el señor Carlos Alberto Rojas Carvajal.

B. La República de Colombia actúa conforme al artículo 24 del Tratado del TJCA

[25]. Por medio de la presente se expresa que la República de Colombia actúa conforme al artículo 24 del TCTJCA, que señala lo siguiente:

Artículo 24.- *Cuando un País Miembro considere que otro País Miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, elevará el caso a la Secretaría General con los antecedentes respectivos, para que ésta realice las gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento, dentro del plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior. Recibida la respuesta o vencido el plazo sin que se hubieren obtenido resultados positivos, la Secretaría General, de conformidad con su reglamento y dentro de los quince días siguientes, emitirá un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones, el cual deberá ser motivado.*

Si el dictamen fuere de incumplimiento y el País Miembro requerido persistiere en la conducta objeto del reclamo, la Secretaría General deberá solicitar el pronunciamiento del Tribunal. Si la Secretaría General no

⁸ SGCAN. Decisión 623. Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento. Artículo 14.

intentare la acción dentro de los sesenta días siguientes de emitido el dictamen, el país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal.

Si la Secretaría General no emitiera su dictamen dentro de los setenta y cinco días siguientes a la fecha de presentación del reclamo o el dictamen no fuere de incumplimiento, el país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal⁹.

C. Identificación y descripción clara de la medida que constituye el incumplimiento

[26]. Se identifica como medida que constituye el incumplimiento la Nota Verbal No. MREMH-SSRV-2026-0001-N del 1º de enero de 2026 expedida por la Subsecretaría de Soberanía y Relaciones Vecinales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador.

[27]. Mediante esta medida, la República del Ecuador señala lo siguiente:

*(...) el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana – Subsecretaría de Soberanía y Relaciones Vecinales – tiene a honra informar que **las autoridades competentes del Estado ecuatoriano han autorizado de manera excepcional la habilitación controlada del paso fronterizo CEBAF San Miguel, con el objetivo exclusivo de garantizar la continuidad del transporte de crudo colombiano hacia la Estación de Bombeo Amazonas, ubicada en la ciudad de Lago Agrio. Se adjunta el listado de personas y vehículos debidamente autorizados para el ingreso y posterior salida de territorio ecuatoriano***¹⁰. (NFT).

[28]. Como se ve, esta medida condiciona la importación de "crudo colombiano" por el paso fronterizo de San Miguel a que el gobierno ecuatoriano autorice a las personas y los vehículos que lo transportarán.

[29]. Antes de la implementación de la medida reclamada, el crudo colombiano ingresaba al territorio ecuatoriano por camiones, a través del Paso fronterizo de San Miguel, sin ningún tipo de restricción.

⁹ Decisión 472. Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Artículo 24.

¹⁰ República del Ecuador. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Nota Verbal No. MREMH-SSRV-2026-0001-N del 1 de enero de 2026.

- [30]. Al respecto, es pertinente señalar que, en términos económicos y logísticos, es indispensable que el crudo colombiano que pretenda ser transportado por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) o el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), ingrese al territorio ecuatoriano vía carretera por el paso de San Miguel¹¹. Lo anterior, teniendo en cuenta que transportar crudo colombiano en camiones, desde su punto de extracción (Orito, departamento de Putumayo en Colombia), para luego ser ingresado a Ecuador por el paso fronterizo de San Miguel, con destino a Nueva Loja, Cantón de Lago Agrio en Ecuador, cubre una distancia de 98 kilómetros.
- [31]. En contraste con lo anterior, si bien es permitido el ingreso, sin ningún tipo de restricción, del crudo transportado por camiones, a través del puente internacional de Rumichaca con destino a Nueva Loja, dicho trayecto desde Orito (departamento de Putumayo en Colombia) cubre una distancia de aproximadamente 550 kilómetros. Por ende, el ingreso de crudo colombiano al territorio de Ecuador solo es viable, en términos económicos, a través de el paso fronterizo de San Miguel.
- [32]. Como se ve, el paso fronterizo de San Miguel es un nodo logístico relevante para el comercio bilateral y comunitario, que va más allá del comercio de hidrocarburos. Para el año 2025, las exportaciones de petróleo crudo fueron transportadas por un total de 13.117 vehículos autorizados y habilitados por el Puente Internacional de San Miguel, los cuales prestaron el servicio de transporte de carga internacional de mercancías. A su vez, se destaca que el tracto camión es el principal vehículo utilizado y que las exportaciones de crudo colombiano a terceros países alcanzaron cifras significativas, con un total de más de USD 899 millones en el periodo 2022 al 2025¹².

¹¹ SGCAN. Resolución No. 2590 del 14 de mayo de 2026. La SGCAN, a la altura del párrafo 69, señala: *"En términos generales, entre el 1 de enero y el 24 de diciembre de 2025, se contabilizaron 13.013 tractocamiones que efectivamente prestaron el servicio de transporte internacional y movilizaron un volumen de 2.921.086 barriles de petróleo crudo, por un valor de USD 159,66 millones hacia la República del Ecuador"*.

¹² SGCAN. Resolución No. 2590 del 14 de mayo de 2026. La SGCAN, a la altura del párrafo 65 y ss, señala: *"Sobre la importancia del paso fronterizo de San Miguel, en el mismo informe se destaca que, para el periodo 2022-2025, en importaciones se registraron 4.918 operaciones, con un valor FOB acumulado de USD 177 millones y 116 millones expresados en kilogramos (kg), destacando el 2023 como el año de mayor actividad (3.370 operaciones; USD 98,6 millones; y, 77 millones de kg). En paralelo, ingresaron 3.097 vehículos de turismo, con un pico en 2023 (998 vehículos). En exportaciones distintas al crudo se contabilizaron 2.198 operaciones por un valor de USD 117,5 millones, principalmente maquinaria para la industria petrolera, baldosas y cerámicas, con destinos a Quito, Guayaquil y Lago Agrio"*.

[33]. En relación con lo anterior, durante las visitas de verificación adelantadas el pasado 23 y 27 de marzo de 2026 por la SGCAN, esta encontró lo siguiente:

[78] Durante la visita se constató, entre otras cosas, el cierre total del paso fronterizo en el Puente Internacional San Miguel, que permanece en dicho estado desde el 25 de diciembre de 2025, restringido mediante vallas metálicas. El cruce de la delegación de funcionarios de la SGCAN fue posible gracias a una autorización especial, gestionada por las autoridades ecuatorianas, otorgada específicamente en el marco de la investigación conducida por la SGCAN.

[79] En el sector de hidrocarburos, los hallazgos descritos en las reuniones con los operadores afectados detallan una crisis logística, debido al cierre del paso para el transporte del crudo. Dicha situación, según se refirió, ha obligado a desviar la producción del Putumayo —estimada en 25.000 barriles diarios— hacia la estación Babillas en el departamento del Huila (suroccidente de Colombia), generando una congestión crítica.

[80] Como resultado de las visitas, los operadores de petróleo indicaron que, con un precio del Brent cercano a los USD 100, la restricción en la frontera representa una pérdida de competitividad de aproximadamente 22.000 barriles por día frente a una producción nacional de 746.000 barriles, afectando indirectamente a 215 compañías de servicios petroleros. Asimismo, mencionaron que, en cuanto a las zonas de producción en el departamento del Putumayo, se encuentra identificado el "Campo Mirto", que produce aproximadamente 430 barriles diarios y carece de conexión al SOTE, lo que complica su evacuación con la medida adoptada.

[81] Además, dichos operadores mencionaron que, respecto de la logística de transporte de crudo, los tiempos de traslado pueden variar ampliamente según la distancia, el tipo de infraestructura y el modo de transporte utilizado; por cuanto argumentan que el crudo extraído de campos ubicados en el extremo sur del Putumayo, solía ser trasladado directamente hacia San Miguel para su descarga en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Sin embargo, tras las restricciones derivadas de la crisis del Puente Internacional de San Miguel, el transporte debe desviarse hacia el Huila.

[82] De la información anterior, y con base en las visitas realizadas, se puede resumir que, para el operador de petróleo, la presunta afectación derivada de la medida adoptada es la siguiente:

Trayecto mucho más largo hasta el descargadero Babillas; situación que Aumenta los tiempos de transporte e impide mantener los mismos volúmenes Diarios de despacho;

Saturación del descargadero donde confluyen varios operadores y Transportistas, reduciendo así su capacidad operativa; y,

Riesgo del cierre de pozos ante la imposibilidad de evacuar el crudo, sumado a los costos acumulados¹³.

- [34]. Así las cosas, considerando que la referida medida fue calificada por la SGCAN como una restricción al comercio subregional andino conforme a lo dispuesto por el artículo 73 del AC, mediante la Resolución 2590 del 14 de mayo de 2026, se confirma que aquella constituye una abierta violación del Programa de Liberación y de los principios fundamentales de la CAN.

D. Identificación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina que son objeto de incumplimiento

- [35]. Las normas de la Comunidad Andina objeto de incumplimiento son:

- Artículos 1 y 2 del AC (Objetivos fundamentales de la CAN).
- Artículos 72, 73, 76 y 77 del AC (Programa de Liberación).
- Artículo 3, literal i), y 104 del AC (Integración Física).
- Artículo 139 del AC (Principio NMF).
- Artículos 3, 13, 14, 15, 16 y 33 de la Decisión 837.
- Artículo 3 de la Decisión 502.
- Artículo 4 del TCTJCA.

E. Razones por las cuales la medida objeto de reclamo constituye un incumplimiento de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina

¹³ SGCAN. Resolución 2590 del 14 de mayo de 2026. Párrafos 78-82.

- [36]. A continuación se desarrollan las razones por las cuales se considera que la medida objeto de reclamo constituye un incumplimiento respecto de las disposiciones identificadas en el acápite inmediatamente anterior.

1. La medida incumple los artículos 1 y 2 del AC (objetivos fundamentales de la CAN)

- [37]. El comportamiento de Ecuador, consistente en condicionar la importación de “crudo colombiano” por el paso fronterizo de San Miguel a que el gobierno ecuatoriano autorice a las personas y los vehículos que lo transportarán, es contrario a los compromisos consignados en los artículos 1 y 2 del AC.
- [38]. En primer orden, se tiene que la medida es contraria al principio de equidad, reconocido en los artículos 1 y 2 del AC y; segundo, violatoria del principio de solidaridad incorporado en el artículo 1 del AC.
- [39]. Comenzando por el principio de equidad, cabe mencionar que el mismo se inscribe dentro de un bien jurídico tutelado por el ordenamiento jurídico comunitario, como es el de procurar el permanente mejoramiento del nivel de vida de los Países Miembros, el cual se entiende como un fin propio y un interés fundamental de la Comunidad Andina, conforme lo refirió el TJCA, así:

*En efecto, el artículo 1 del Acuerdo de Integración consagra como sus objetivos los siguientes: la promoción del desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros, **en condiciones de equidad**, mediante la integración y la cooperación económica y social; la aceleración del crecimiento de dichos Países y la generación de ocupación; la facilitación de la participación de los Países Miembros en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano; la disminución de la vulnerabilidad externa y el mejoramiento de la posición de tales Países en el contexto económico internacional; el fortalecimiento de la solidaridad subregional y la reducción de las diferencias de desarrollo entre los citados Países.*

Y estos objetivos, según el inciso final del artículo 1 del Acuerdo, tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión. Por tanto, el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de los Países Miembros se constituye en un fin propio y en el interés fundamental de la Comunidad. Se trata de un bien jurídico digno de tutela que, puesto en relación con el objetivo del

*desarrollo, conduce a una concepción amplia de este objetivo, basada en las necesidades fundamentales de los habitantes de la Subregión. En este marco, se concibe el desarrollo de los Países Miembros como un proceso dirigido a procurar la satisfacción de las necesidades fundamentales de sus habitantes, mediante la integración y la cooperación económica y social, la aceleración del crecimiento, la generación de ocupación y la participación en el proceso de integración regional. Además, de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo, **el desarrollo debe conducir a una distribución equitativa de los beneficios de la integración entre los Países Miembros**, de modo de reducir sus diferencias¹⁴. (NFT).*

- [40]. En otros términos, la forma en que habrá de darse cumplimiento al ordenamiento jurídico subregional andino debe tener en cuenta el trato equitativo que ha de regir el comportamiento de los Países Miembros para lograr el desarrollo equilibrado y armónico de éstos, razón por la cual las medidas que adopte cada País Miembro requerirán observar parámetros mínimos de equidad.
- [41]. Lo dicho significa que la sola invocación de un precepto normativo o el cumplimiento formal de sus requerimientos no resulta suficiente para demostrar que una conducta se ajusta al ordenamiento jurídico andino, sino que toda actuación de los Países Miembros de la CAN debe guiarse bajo criterios de trato equitativo, por mandato expreso de los artículos 1 y 2 del AC.
- [42]. El principio de trato equitativo se ha desarrollado, en el marco del derecho internacional, en la Carta de Naciones Unidas. Al respecto, el artículo 1.2 de la Carta de las Naciones Unidas menciona expresamente el principio de igualdad de derechos entre los Estados, y que en el marco de la CAN implica un tratamiento idéntico entre Países Miembros¹⁵.
- [43]. Resulta importante destacar que la igualdad de derechos fue ratificada en la reunión presidencial de los Países Miembros del Acuerdo de Integración

¹⁴ TJCA. Proceso No. 137-IP-2003. Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en el inciso final del artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, y en los artículos 1, 3, 5, 19 y 54 de la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Corte Constitucional de la República de Colombia, e interpretación de oficio de los artículos 4 y 53 *eiusdem*. Sentencia de 10 de marzo de 2004.

¹⁵ Carta de las Naciones Unidas. Artículo 1.2-. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal; (subrayas fuera del texto original).

Subregional, llevada a cabo en Galápagos (Ecuador), el 17 y 18 de diciembre de 1989, en la que, además de agregar el respeto por la soberanía, entre otros aspectos, declararon lo siguiente:

El compromiso con los propósitos y principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos; y

*La igualdad jurídica de los Estados, la libre determinación de los pueblos, el respeto de la soberanía y la protección de los derechos humanos*¹⁶.

- [44]. De la misma forma, en la séptima reunión del máximo órgano del Sistema Andino de Integración, celebrada en Quito (Ecuador) el 5 de septiembre de 1995, se consignó lo siguiente:

*Las presentes Directrices tienen como objetivo avanzar hacia la Integración Latinoamericana y Hemisférica, **preservar los principios de equidad** y justicia social internacional, mediante la armonización de políticas macroeconómicas conducentes al desarrollo sostenible, así como definir políticas sociales orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de la Subregión y la modernización del Estado y de los Organismos Comunitarios*¹⁷.

- [45]. En este sentido, es importante recalcar que el Consejo Presidencial Andino tiene como función la fijación de directrices y orientaciones políticas sobre los ámbitos de la integración **que deben ser instrumentados por los órganos del Sistema Andino de Integración (SAI), de conformidad con sus competencias y los mecanismos establecidos, así como ejecutados por estos**, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Acuerdo de Cartagena.

- [46]. De otro lado, continuando con el principio de solidaridad, además de inequitativa, la conducta de Ecuador transgrede el principio de solidaridad regional. El artículo 1 del AC incorpora este concepto no como un simple postulado programático o sustantivo, sino como una verdadera categoría con contenido jurídico concreto.

¹⁶ Frase Preambulatoria 12 – Declaración de Galápagos. Disponible en: <https://oilac.jursoc.unlp.edu.ar/documentos/can/2-DECLARACIONGALAPAGOS1989.pdf>

¹⁷ Disponible en: https://www.comunidadandina.org/wp-content/uploads/2022/07/CP_07.doc (Página 2)

- [47]. En efecto, el concepto de solidaridad, en derecho internacional, se ve antecedido por el de cooperación internacional, el cual es un elemento fundamental para lograr el desarrollo económico.
- [48]. La cooperación internacional, en términos generales, es la "*(...) herramienta complementaria para el logro de los objetivos de desarrollo definidos por los Países Miembros en el marco del proceso andino de integración. En este contexto, los programas y proyectos comunitarios de cooperación internacional para el desarrollo permiten una relación económica o comercial más cercana con base en el principio de solidaridad (...)*"¹⁸.
- [49]. A su vez, el concepto de cooperación internacional es precedido por el soberanismo, esto es, la etapa previa a la institucionalización del orden mundial liberal con la fundación de las Naciones Unidas, y que se caracterizaba por la toma de medidas restrictivas al comercio; y las guerras, tanto comerciales como bélicas, constituían la regla general de las relaciones internacionales¹⁹.
- [50]. Precisamente, el paso del soberanismo a la cooperación internacional marcó la transición del derecho internacional clásico al derecho internacional contemporáneo, que se caracteriza por la proscripción de la guerra como mecanismo de solución de controversias, el respeto por los derechos humanos, y la progresiva liberalización del comercio. Así, tras cinco siglos de soberanismo, se abrió paso la cooperación entre las naciones a través de un sistema internacional reglado, y en donde el libre comercio resaltaba por representar la regla general²⁰.
- [51]. La CAN fue incluso más ambiciosa en 1969, al plantear un modelo de integración regional basado ya no en sólo la cooperación, sino en la solidaridad entre Países Miembros, cuyas agendas políticas y económicas se encontrarán entrelazadas por intereses comunes de progreso y desarrollo. En este punto cabe advertir, como lo ha hecho el TJCA, que la integración andina es el resultado de un proceso buscado por los países y al cual, en el ejercicio de su autonomía, se han acogido

¹⁸ Decisión 759 de 2011. Estrategia Andina para mejorar la Eficacia de la Cooperación Internacional para el Desarrollo.

¹⁹ Vela Obregozo, Bernardo. Tremolada Álvarez, Eric. Paradojas de las controversias territoriales latinoamericanas: Entre el sometimiento a la jurisdicción de la Corte Internacional y la constitucionalización del territorio. Universidad Externado de Colombia. "Esa política exterior soberanista entró en contradicción con los principios de cooperación y multilateralidad que emergieron a mediados del siglo XX con el derecho internacional contemporáneo, cuyos principios y normas fueron incorporados al ordenamiento jurídico de los Estados latinoamericanos mediante cláusulas constitucionales de apertura al derecho internacional."

²⁰ Ibidem.

a las normas que regulan el sistema creado con la finalidad de materializar los objetivos concertados:

La integración andina es un proceso voluntario, deliberado y que fue buscado por los Países Miembros que conforman la Comunidad Andina de Naciones, el cual, para lograr los objetivos y metas comunes, ha adoptado un ordenamiento que debe ser respetado y cumplido por cada uno de los países para fortalecerse mutuamente en lo económico y social²¹.

- [52]. La medida tomada por Ecuador es regresiva y propia de tiempos soberanistas superados hace más de 70 años. La imposición de restricciones al comercio de forma unilateral erosiona esa solidaridad a la que el ordenamiento jurídico andino se debe, y bajo la cual todas sus disposiciones deben ser interpretadas.
- [53]. Así, la medida objeto de reclamo vacía de contenido los artículos 1 y 2 del AC, toda vez que no se soporta en la "equidad y solidaridad regional", y por el contrario crea un escenario regresivo y restrictivo para el comercio subregional.
- [54]. La restricción impuesta por Ecuador no está acompañada de justificación o explicación suficiente para validarla conforme al ordenamiento jurídico andino. Esto demuestra que el diseño de la medida nada se preocupa por cumplir formalmente con los postulados fundamentales del derecho andino.
- [55]. Esta conducta unilateral de Ecuador merece el máximo reproche por parte de la institucionalidad de la CAN. Es inadmisibles que en el marco de la CAN haga carrera la posibilidad de imponer restricciones al Programa de Liberación, contrarias a los principios en los que se funda la integración andina.

2. La medida incumple los artículos 72, 76 y 77 del AC (Programa de Liberación)

- [56]. El Programa de Liberación, consagrado en los artículos 72, 76 y 77 del AC, tiene por objeto **eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro.**

²¹ TJCA. Proceso 92-AI-2000. Pág 11.

- [57]. De acuerdo con el artículo 72 del AC, el Programa de Liberación impone a los Países Miembros de la CAN la obligación de abstenerse de introducir restricciones de todo orden a las importaciones de bienes originarios de los demás Miembros.
- [58]. Por su parte, el artículo 76 del citado Acuerdo le otorga a ese Programa el carácter de automático e irrevocable, y extiende su aplicación a la universalidad de los productos, salvo las disposiciones de excepción establecidas en el mismo.
- [59]. A su vez, el artículo 77 establece el compromiso de que los Países Miembros se abstendrán de aplicar gravámenes y de introducir restricciones de todo orden a las importaciones de bienes originarios de la Subregión.
- [60]. Como ha señalado en reiteradas ocasiones el TJCA, el Programa de Liberación constituye uno de los mecanismos más relevantes con los que cuenta el AC para avanzar hacia la consolidación de sus objetivos y su cumplimiento constituye un parámetro de primer orden para lograr la integración subregional andina²².
- [61]. En similar sentido, el TJCA ha dicho que:

El programa de liberación de bienes tiene como uno de sus objetivos que los consumidores andinos tengan más opciones de elección al momento de adoptar sus decisiones de consumo, en el marco de un mercado ampliado. Así, en lugar de sólo elegir productos locales, el programa de liberación le otorga la oportunidad de elegir entre una mayor gama y variedad de productos provenientes de otros países miembros de la Comunidad Andina.

El intercambio de bienes y servicios permite que el proceso competitivo genere eficiencias económicas en los mercados, lo que beneficia a los consumidores, a las empresas y a los propios Estados. A los consumidores porque obtienen productos a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y en forma más accesible. A las empresas porque la presión competitiva las incentiva a mejorar sus niveles de competitividad, preparándolas para aprovechar los mercados ampliados originados por el libre comercio. Y a los Estados porque la mejora en competitividad de las empresas, así como la mayor inversión y comercio originados de la competencia, provocan más ventas e ingresos y, por tanto, más

²² TJCA. Proceso 1-AI-1997 y Proceso 272-IP-2016.

*impuestos que convertidos en recursos públicos permiten una mejor provisión de infraestructura y servicios públicos*²³.

- [62]. Ahora bien, en la Interpretación Prejudicial del Proceso 111-IP-2011 del 13 de febrero de 2012, el TJCA también se refirió al Programa de Liberación como uno de los instrumentos o mecanismos fundamentales para alcanzar los objetivos del AC. Tal como lo manifiesta la misma norma constitutiva en su artículo 3 literal d), es una herramienta clave que, junto con otras, busca realizar los objetivos que el propio Acuerdo determina en su artículo 1, así:

*Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad. 2. Acelerar el crecimiento de los Países Miembros y disminuir su nivel de desempleo. 3. Facilitar la participación de los Países Miembros en el proceso de integración regional con la finalidad de consagrar un mercado común latinoamericano. 4. Fortalecer la posición de los Países Miembros en el concierto económico internacional. 5. Generar lazos de solidaridad subregional y reducir las asimetrías existentes entre los Países Miembros. 6. Lograr como fin último la calidad de vida de los habitantes de la subregión (...)*²⁴.

- [63]. Así, el ordenamiento andino busca evitar que los Países Miembros adopten restricciones al comercio que constituyan una amenaza ilegítima al principio de libre circulación de mercancías. En tal sentido, el artículo 73 del AC establece que "se entenderá por "restricciones de todo orden" cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País Miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral"²⁵.

- [64]. Al tenor de lo dispuesto en ese artículo 73, cualquier medida impuesta unilateralmente por cualquiera de los Países Miembros constituirá una restricción al comercio en la región, cuando impida o dificulte las importaciones. La SGCAN profundiza esta consideración, al señalar que:

La norma andina y su jurisprudencia advierten hasta dos tipos de análisis para calificar el efecto de la medida: la primera, para verificar si la medida objeto de investigación impide, suspende o prohíbe el acceso de las importaciones provenientes de los Países Miembros; y la segunda; para

²³ TJCA. Proceso 484-IP-2018. Pág 7.

²⁴ TJCA. Proceso 111-IP-I-2011.
<https://www.tribunalandino.org.ec/ips/Pr111ip2011.pdf>

Disponible en:

²⁵ Acuerdo de Cartagena. Artículo 73.

verificar si la medida objeto de análisis al no prohibir, dificulta, encarece, o hace más onerosa la operación de importación de los productos de origen andino”²⁶.

- [65]. La medida objeto de reclamo fue adoptada por razones de seguridad (prevenir el contrabando, tráfico de precursores químicos y delitos vinculados a drogas), sin embargo, de conformidad con el análisis efectuado por la SGCA, esta justificación no cumplió con el test de idoneidad que el estándar comunitario exige en el artículo 73 (b) del AC²⁷. Con fundamento en lo anterior, es evidente que la medida adoptada por la República del Ecuador mediante la Nota Verbal número MREMH-SSRV-2026-0001-N del 1º de enero de 2026 incumple el ordenamiento jurídico andino, y específicamente el programa de liberación, que prohíbe expresamente la aplicación de restricciones al comercio subregional.
- [66]. Al respecto, la Resolución No. 2590 del 14 de mayo de 2026 expresamente indicó que la medida ecuatoriana viola el Programa de Liberación. En extenso, la SGCAN señaló lo siguiente:

Para el logro de sus objetivos, el artículo 3 del Tratado Fundacional dispone que se emplearán como mecanismos y medidas, entre otros, el Programa de Liberación del intercambio comercial.

Sobre el particular, es importante traer a colación lo señalado por el Tribunal Andino en la sentencia del Proceso 02-AI-2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N.º 2520, que resalta la importancia del Programa de Liberación:

"3.3.4. El Programa de Liberación de bienes sustenta la existencia de un área de libre comercio en el mercado subregional andino, en el que los productos originarios de los Países Miembros circulan libremente sin pagar aranceles en un mercado ampliado, lo que incrementa el poder de elección de los consumidores andinos, pues al interior de dicho mercado tiene la oportunidad de elegir entre una mayor variedad de bienes provenientes

²⁶ SGCA. Resolución 2264 del 9 de mayo de 2022. Párrafo 85, pág. 34.

²⁷ SGCAN. Resolución 2590 del 14 de mayo de 2026. La SGCAN, a la altura del Párrafo 55 señaló: "El Informe Técnico CCFFAA-J2-PL-PFNA-2025-112 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de la República del Ecuador de 23 de diciembre de 202526 emitido por la Dirección General de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, identifica que la República del Ecuador posee seis (6) pasos autorizados y cuatro (4) homologados. También refiere que existen ciento cuarenta y dos (142) pasos no autorizados, lo que evidencia una "frontera porosa" propensa a actividades ilícitas como el contrabando de combustible, gas y narcotráfico".

de los diferentes rincones de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, lo que a vez incrementa la competencia y el bienestar de los mencionados consumidores, quienes pueden tener a su alcance productos a menores precios y de mejor calidad.

3.3.5 El aprovechamiento de un área de libre comercio requiere optimizar la integración física, especialmente a través de la facilitación del transporte de mercancías entre los Países Miembros. (...)

3.3.10 Si bien son muchas las formas en las cuales los ciudadanos andinos pueden ser partícipes directos del proceso de integración y percibir de manera inmediata sus beneficios, no cabe duda de que la posibilidad de circular libremente en el territorio comunitario es una de las más emblemáticas y constituye uno de los principales logros del proceso integrador”²⁸.

- [67]. Tras analizar la medida ecuatoriana, y especialmente su significativo impacto en la industria exportadora colombiana, la SGCAN concluyó lo siguiente:

En el presente caso, la prohibición o limitación del transporte de crudo entre Colombia y Ecuador, en tanto afecta la circulación de un “producto originario del territorio” de un País Miembro, como lo dispone el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, configura una medida con efecto restrictivo directo sobre el comercio intracomunitario, al impedir o dificultar su normal desplazamiento hacia los mercados de destino. Por consiguiente, la medida constituye una restricción al comercio intracomunitario incompatible con el Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena, sin que resulte jurídicamente admisible su justificación en la distinción formal entre bienes y servicios²⁹.

- [68]. Así las cosas, es absolutamente claro que Ecuador se encuentra violando el Programa de Liberación, tal y como fue constatado por la SGCAN en su Resolución No. 2590 del 14 de mayo de 2026.

3. La medida incumple los artículos 3, literal i), y 104 del AC (Integración Física)

²⁸ Ibidem. Pág. 49.

²⁹ Ibidem. Pág 26-27.

- [69]. El ordenamiento jurídico andino no se limita a enunciar objetivos abstractos, sino que consagra normativamente los medios imperativos y vinculantes para alcanzarlos. En este sentido, el artículo 3 del AC dispone de manera categórica que, para alcanzar los fines del tratado, se emplearán mecanismos específicos, destacando expresamente en su literal i) a "La integración física".
- [70]. Este mandato estructural halla su desarrollo y exigibilidad directa en el artículo 104 del mismo Acuerdo, el cual impone a los Países Miembros la obligación ineludible de desarrollar acciones conjuntas para lograr un mejor aprovechamiento del espacio físico y fortalecer la infraestructura y los servicios necesarios para el avance del proceso de integración. Dicha disposición subraya, además, que esta acción debe ejercerse prioritariamente en los campos de la energía y los transportes, exigiendo la adopción de las medidas necesarias *"a fin de facilitar el tráfico fronterizo entre los Países Miembros"*.
- [71]. Como se ve, la integración física constituye la materialización territorial del proyecto comunitario. Este mecanismo exige la conectividad real de las infraestructuras, el libre uso de los corredores logísticos binacionales y la eliminación de barreras materiales o administrativas que fraccionen y aislen los territorios de los Países Miembros. Es el presupuesto fáctico ineludible sin el cual el Programa de Liberación carece de viabilidad material.
- [72]. La República del Ecuador, mediante la adopción y el sostenimiento contumaz de la medida contenida en la Nota Verbal Nro. MREMH-SSRV-2026-0001-N, quiebra este mandato comunitario de integración física. Al someter el paso fronterizo CEBAF San Miguel a una "habilitación controlada" de carácter excepcional, y condicionar el transporte internacional de crudo colombiano de manera exclusiva a un listado cerrado y unilateral de personas y vehículos autorizados, el Estado ecuatoriano ataca la integración física y conectividad logística entre ambos países.
- [73]. En lugar de fortalecer la infraestructura de transporte o de cumplir con su deber de "facilitar el tráfico fronterizo" impuesto por el artículo 104, la actuación del Ecuador erige un bloqueo material y administrativo que fracciona el territorio comunitario. Convertir el uso de la infraestructura binacional en un privilegio discrecional y excluyente no es una medida de administración fronteriza; es un acto deliberado de desintegración física que vacía de contenido la obligación consagrada en el artículo 3, literal i), del Acuerdo de Cartagena y fractura el pilar sobre el cual descansa el intercambio comercial de la subregión.

4. La medida incumple el artículo 139 del AC (Principio NMF)

- [74]. La medida impuesta por la República del Ecuador también constituye una violación directa al principio de NMF, pilar fundamental de la integración andina consagrado en el artículo 139 del AC.
- [75]. De conformidad con el ordenamiento jurídico andino, el principio NMF obliga a los Países Miembros a garantizar que cualquier ventaja, favor, inmunidad o privilegio aplicado a un producto destinado a cualquier otro país, sea extendido inmediata e incondicionalmente a los productos similares de los demás Países Miembros.
- [76]. Así lo reconoce el artículo 139 del AC, que establece que:

Artículo 139.- *Cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que se aplique por un País Miembro en relación con un producto originario de o destinado a cualquier otro país, será inmediata e incondicionalmente extendido al producto similar originario de o destinado al territorio de los demás Países Miembros.*

Quedan exceptuados del tratamiento a que se refiere el inciso precedente, las ventajas, favores, franquicias, inmunidades y privilegios ya concedidos o que se concedieran en virtud de convenios entre Países Miembros o entre Países Miembros y terceros países, a fin de facilitar el tráfico fronterizo³⁰.

- [77]. En consonancia con esto, el TJCA ha subrayado que el principio de no discriminación —*en sus vertientes de trato nacional y nación más favorecida*— constituye la piedra angular del comercio intracomunitario y la ejecución del programa de liberación. Al respecto, el Tribunal ha sentado una amplia jurisprudencia relacionada con el principio NMF.
- [78]. En primera medida, en el marco del Proceso 2-AI-97, el TJCA señaló que la Cláusula de la Nación más favorecida es un "*mecanismo cuyo efecto es el de establecer un trato igualitario el cual automáticamente tiene que variar para hacerse equivalente a cualquier eventual ventaja o privilegio que se acuerde a*

³⁰ Acuerdo de Cartagena. Artículo 139.

un País Miembro restableciéndose así el tratamiento de igualdad con los demás Países Miembros”³¹.

[79]. Posteriormente, en el contexto del proceso 32-AI-2001, el TJCA indicó lo siguiente:

A partir del análisis de los orígenes andinos relativos al establecimiento de la cláusula de la Nación más Favorecida y, de las características jurídicas y técnicas de la misma, fijadas por la doctrina y recogidas también en jurisprudencia de este Tribunal, puede concluirse que se trata de un mecanismo incorporado al Ordenamiento Jurídico Comunitario, que no determina otras excepciones que las taxativamente establecidas en el propio artículo 155 del Acuerdo de Cartagena y que, en consecuencia, tiene el carácter de disposición de respeto obligatorio y automático para todos los Países Miembros, no siendo por lo tanto oponibles a ese compromiso, argumentos o justificaciones que no se enmarquen, fehacientemente, en los dispositivos que la constituyen y consagran³².

[80]. También, en el marco del proceso 111-IP-2011, el TJCA señaló que:

El tratamiento de la Nación Más Favorecida consiste, de manera elemental, en que cualquier concesión arancelaria dada por un país a otro, debe ser automáticamente aplicada a todos los demás que puedan invocarlo por razón de tenerlo vigente en sus relaciones comerciales bilaterales o multilaterales con el país otorgante de las ventajas.

Con similares características, objetivos y consecuencias, el artículo 155 del Acuerdo de Cartagena consagra de un modo general y lo inserta de esta manera en el Ordenamiento Jurídico Andino, la cláusula igualmente llamada de la “Nación Más Favorecida” en beneficio de todos los Países Miembros. Establece la norma comunitaria que “cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que se aplique por un País Miembro en relación con un producto originario de o destinado a cualquier otro país, será inmediata e incondicionalmente extendido al producto similar originario de o destinado al territorio de los demás Países Miembros.

³¹ TJCA. Proceso 2-AI-97. Pág. 18.

³² TJCA. Proceso 32-AI-2001. Pág. 8.

El hecho de que un país de la Comunidad no extienda a las importaciones de bienes originarios de los otros Países Miembros, el tratamiento que con características más favorables aplique a terceros países, constituye, en principio, un rompimiento del compromiso de trato igualitario y equitativo establecido en el Artículo 155 del Acuerdo de Cartagena. En todo caso, deberá siempre analizarse si la no extensión de las ventajas aludidas se encuentra jurídicamente justificada por corresponder o encontrarse cubierta por alguna de las excepciones previstas para la no extensividad del beneficio.

(...)

La cláusula de más favor es pues un mecanismo incorporado al Acuerdo de Cartagena desde la fecha misma de su suscripción, cuyo efecto es el de establecer un trato igualitario, automáticamente ajustable para hacerse equivalente a cualquier ventaja o privilegio que un País Miembro reconozca o conceda a un tercero, para restablecer, de esa manera, la igualdad de trato respecto de los Socios Comunitarios.

Las características fundamentales de esta figura convertida en ley para los Países Andinos, son aquellas de ser inmediatamente aplicada cuando se constituye la ventaja a favor de un tercero, también en beneficio de los demás Países Miembros; que esa extensión dispuesta como consagración del principio de equidad, debe ser incondicional y, consecuentemente, no sujeta a compensaciones de clase alguna, menos aún sometida a exigencias en materia de reciprocidad.

A partir del análisis de los orígenes andinos relativos al establecimiento de la cláusula de la Nación más Favorecida y, de las características jurídicas y técnicas de la misma, fijadas por la doctrina y recogidas también en jurisprudencia de este Tribunal, puede concluirse que se trata de un mecanismo incorporado al Ordenamiento Jurídico Comunitario, que no determina otras excepciones que las taxativamente establecidas en el propio artículo 155 del Acuerdo de Cartagena y que, en consecuencia, tiene el carácter de disposición de respeto obligatorio y automático para todos los Países Miembros, no siendo por lo tanto oponibles a ese compromiso, argumentos o justificaciones que no se enmarquen,

*fehacientemente, en los dispositivos que la constituyen y consagran (...)*³³. (NFT).

- [81]. Como se ve, según la jurisprudencia del TJCA, el compromiso de NMF debe aplicarse de manera **inmediata e incondicional**, lo que implica que no está sujeto a exigencias en materia de reciprocidad ni a compensaciones de ninguna clase. Por lo tanto, cualquier argumento o justificación que pretenda invocar la República del Ecuador, y que no se encuentre enmarcado fehacientemente en las excepciones taxativamente establecidas en el AC, resulta inoponible frente a esta obligación.
- [82]. En consecuencia, bajo el entendido de que el principio NMF se constituye en un mecanismo automáticamente ajustable para restablecer la igualdad de trato entre países, la imposición de restricciones al comercio que discriminen particularmente a Colombia rompe el compromiso de trato igualitario y equitativo esencial para la integración subregional.
- [83]. Así las cosas, se solicita a la SGCAN que declare la medida como constitutiva de incumplimiento al principio de NMF, motivo por el cual, resulta contraria al artículo 139 del Acuerdo de Cartagena.

5. La medida incumple los artículos 3, 13, 14, 15, 16 y 33 de la Decisión 837

- [84]. El ordenamiento jurídico andino consagra un régimen integral y unificado para el transporte internacional de mercancías por carretera, materializado en la Decisión 837. Esta normativa establece los principios y reglas que garantizan la operatividad logística, la cual resulta inescindible del Programa de Liberación.
- [85]. La República del Ecuador, mediante la imposición y el mantenimiento de la medida contenida en la Nota Verbal Nro. MREMH-SSRV-2026-0001-N, desdibuja y vulnera frontalmente este régimen comunitario, quebrantando de manera específica lo dispuesto en los artículos 3, 13, 14, 15, 16 y 33 de dicha norma.
- [86]. El artículo 3 de la Decisión 837 establece lo siguiente:

Artículo 3.- La oferta y la prestación del servicio de transporte internacional se sustentan en los siguientes principios fundamentales:

³³ TJCA. Proceso 111-IP-2011. Págs. 13 y 14.

libertad de operación; acceso al mercado; trato nacional; transparencia; no discriminación, igualdad de tratamiento legal; libre competencia; y, nación más favorecida³⁴. (NFT).

- [87]. Como se ve, el artículo 3 de la Decisión 837 erige los pilares sobre los cuales debe descansar la oferta y prestación del servicio de transporte internacional de mercancías por carretera en la Subregión. Al instrumentalizar y mantener la restricción contenida en la Nota Verbal Nro. MREMH-SSRV-2026-0001-N, la República del Ecuador quebranta de manera concurrente y sistemática los siguientes principios rectores:
- [88]. El principio de igualdad de tratamiento legal exige que las reglas de juego sean uniformes y equitativas. Al imponer un régimen de "habilitación controlada" de carácter excepcional aplicable exclusivamente al "crudo colombiano", el Estado ecuatoriano crea una asimetría jurídica. Somete a los transportistas y vehículos colombianos a un escrutinio discrecional y a una barrera administrativa (la inclusión en un listado dictado por la República del Ecuador) que fractura la igualdad de tratamiento legal. Esta selección unilateral de quiénes pueden operar y quiénes quedan excluidos convierte un mercado de libre competencia en un privilegio administrado soberanamente.
- [89]. En segundo lugar, el principio de transparencia exige que las medidas restrictivas sean públicas, claras y previsibles. Sin embargo, la medida ecuatoriana adoleció de opacidad desde su origen. Tal como lo constató la SGCAN en la Resolución No. 2590, el listado de personas y vehículos exceptuados ni siquiera fue adjuntado a la Nota Verbal remitida originalmente a la República de Colombia, implicando que la medida no fue notificada de manera completa para su pleno conocimiento. Aún más, en su informe técnico de contestación, la República del Ecuador caracterizó dicho documento como confidencial. Condicionar el comercio a listas secretas y cerradas cuyos criterios de selección, inclusión o exclusión son arbitrarios y ocultos, constituye una violación al principio de transparencia descrito por el artículo 3 de la Decisión 837.
- [90]. En un tercer renglón, el principio de libertad de operación, desarrollado en extenso en el artículo 13³⁵ la Decisión 837, se presenta como una garantía

³⁴ Decisión 837 de 2019. Sustituye la Decisión 399 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre Transporte Internacional de Mercancías por Carretera. Artículo 13.

³⁵ Ibidem. Artículo 13.- Los Países Miembros, en sus respectivos territorios, conceden al transportista autorizado el derecho a ofertar y prestar el servicio de transporte internacional, así como a establecer oficinas o sucursales.

comunitaria que asegura que los prestadores del servicio de transporte internacional de mercancías puedan operar sin barreras o modalidades forzosas que desvirtúen la eficiencia de su actividad. La República del Ecuador vulnera este principio al condicionar el paso fronterizo a un listado nominativo y cerrado de aproximadamente 340 conductores y vehículos, limitando además los despachos a dos ventanas horarias diarias (de 11:00 a 12:00 y de 15:00 a 16:00 horas). El uso de listas cerradas introduce un efecto excluyente que restringe de facto la libertad de operación a los transportistas colombianos debidamente habilitados por su país de origen.

- [91]. En cuarto lugar, el principio de libre tránsito o acceso a mercados está desarrollado en el artículo 14 de la Decisión 837. Esta disposición ordena de manera imperativa que los Países Miembros "*concederán libre tránsito*" en sus respectivos territorios a los vehículos habilitados y unidades de carga debidamente registrados para el transporte internacional³⁶.
- [92]. Si bien el ingreso de camiones con crudo colombiano está permitido sin ningún tipo de condicionamiento por el puente internacional de Rumichaca, no sucede lo mismo con el paso fronterizo de San Miguel, en donde el ingreso de crudo colombiano está sometido a que se realice por camiones y conductores autorizados por Ecuador.
- [93]. De esta forma, el libre tránsito se vulnera cuando una disposición administrativa impide la continuidad del desplazamiento de un vehículo que ya cuenta con el registro y la habilitación técnica comunitaria expedida por su país de origen. Al mantener cerrado el paso fronterizo CEBAF San Miguel y restringir el cruce exclusivamente a los transportistas que figuran en su lista unilateral, la República del Ecuador bloquea el libre tránsito de todo vehículo colombiano que transporte crudo, aun estando debidamente habilitado, pero no incluido en dicha autorización excepcional.
- [94]. En un quinto renglón, en cuanto al principio de trato nacional, desarrollado en extenso en el artículo 15³⁷ de la Decisión 837, establece el compromiso de otorgar un tratamiento no menos favorable a los transportistas de los Países Miembros que el concedido a los nacionales.

³⁶ Ibidem. Artículo 14.- Los Países Miembros, en sus respectivos territorios, conceden libre tránsito a los vehículos habilitados y unidades de carga, debidamente registrados, para el transporte internacional.

³⁷ Ibidem. Artículo 15.- El transportista autorizado gozará, en los Países Miembros de un tratamiento no menos favorable, que el concedido a los transportistas autorizados de ese país.

[95]. Mediante la Nota Verbal Nro. MREMH-SSRV-2026-0001-N de 1 de enero de 2026, la República del Ecuador condiciona la importación de “crudo colombiano” por el paso fronterizo de San Miguel a que el gobierno ecuatoriano autorice a las personas y los vehículos que lo transportarán. No obstante, la República de Colombia nunca fue notificada de los detalles o contenido exacto de dicha lista, siendo imposible precisar si dicha restricción solo resulta predicable respecto de transportistas colombianos, o si también aplica a ecuatorianos que transiten por el mismo paso fronterizo.

[96]. Así lo reconoció la SGCAN en su Resolución No. 2590 del 1 de enero de 2026:

[93] Con relación a lo expuesto, es fundamental señalar que, si bien la Nota Verbal Nro. MREMH-SSRV-2026-0001-N, de 1 de enero de 2026, menciona una supuesta excepcionalidad para el ingreso a través de un listado de transportistas (personas y vehículos) autorizados de forma previa por la República del Ecuador, dicho listado no se adjuntó a la referida Nota Verbal, implicando que la medida no fue notificada de manera completa a la República de Colombia para su pleno conocimiento.

(...)

[171] Resulta fundamental reiterar que la medida contenida en la Nota Verbal Nro. MREMH SSRV-2026-0001-N del 1 de enero de 2026 hace mención expresa de una lista adjunta de personas y vehículos debidamente autorizados para el ingreso y posterior salida de territorio ecuatoriano, listado que, conforme a la información recabada en las visitas de verificación, no fue remitida a la República de Colombia.

[172] Sin perjuicio de ello, como ya ha sido señalado, previa solicitud, la SGCAN tuvo acceso al listado de personas y vehículos autorizados, que identifica aproximadamente a trescientos cuarenta (340) transportistas habilitados para continuar el transporte de crudo, en respuesta a la solicitud formulada a la República del Ecuador mediante comunicación N° SG/E/DGCOM/361/2026 de 26 de febrero de 2026³⁸.

[97]. De esta forma, en tanto la SGCAN tuvo acceso a la mencionada lista, se solicita dar traslado de esta a la República de Colombia. Igualmente se solicita que, en

³⁸ SGCAN. Resolución No. 2590 del 14 de mayo de 2026. Págs 22, 37 y 38.

la medida que la restricción solo sea predicable respecto de transportistas colombianos y, en consecuencia, no aplique a ecuatorianos, analice y se pronuncie en su dictamen respecto del cumplimiento de los artículos 3 y 13 de la Decisión 837 en cuanto al principio de trato nacional.

- [98]. En una sexta línea, el principio de NMF, desarrollado en el artículo 16³⁹ de la Decisión 837, establece el compromiso en cabeza de los Países Miembros de conceder a los transportistas autorizados, un tratamiento no menos favorable que aquel que, en circunstancias similares, concedan a los transportistas de un País Miembro. Al supeditar la importación y el tránsito del crudo colombiano a un régimen de autorizaciones previas y listas cerradas de transportistas, Ecuador somete a Colombia a condiciones operativas menos favorables y altamente gravosas.
- [99]. Lo anterior supone que la República del Ecuador está otorgando, *de iure*, un "favor o ventaja" (la ausencia de restricciones) a los demás Países Miembros y terceros, mientras lo niega a Colombia. Bajo el principio NMF, cualquier condición de acceso más favorable otorgada a un tercero debe ser extendida automáticamente a Colombia. En este caso, la República del Ecuador supedita la importación de "*crudo colombiano*" a condiciones menos favorables, en comparación con los demás socios andinos e, incluso, terceros.
- [100]. Por último, el artículo 33⁴⁰ de la Decisión 837 establece de manera inequívoca que los Permisos Originarios y los Certificados de Habilitación de los vehículos que conforman la flota serán otorgados por el órgano nacional de transporte por carretera del país de origen del transportista. En el presente caso, tratándose de empresas y vehículos colombianos que prestan el servicio de transporte de crudo, la autoridad única y exclusiva para emitir la documentación habilitante es el Ministerio de Transporte de la República de Colombia.
- [101]. Antes de la implementación de la medida contenida en la Nota Verbal Nro. MREMH-SSRV-2026-0001-N, el crudo colombiano ingresaba al territorio ecuatoriano por camiones, a través del Paso fronterizo de San Miguel sin ningún tipo de restricción.

³⁹ Decisión 837 de 2019. Artículo 16.- Los Países Miembros otorgarán al transportista autorizado, un tratamiento no menos favorable que aquel que, en circunstancias similares, concedan a los transportistas de un tercer país.

⁴⁰ Ibidem. Artículo 33.- El Permiso Originario y el Certificado de Habilitación de los vehículos que conforman la flota, serán otorgados por el organismo nacional de transporte por carretera del país de origen del transportista.

- [102]. No obstante, el Estado ecuatoriano, al supeditar la operación logística a un listado de personas y vehículos debidamente autorizados por sus propias autoridades, se arroga competencias que no le corresponden y usurpa la autoridad conferida por el derecho andino a la República de Colombia. Tal como lo determinó de manera concluyente la Secretaría General en la Resolución No. 2590, al establecer esta lista habilitante y definir requisitos operativos adicionales para el transporte de crudo, la República del Ecuador vulnera directamente el artículo 33 de la referida Decisión. La creación de un régimen de autorizaciones paralelo, cerrado y discrecional es abiertamente incompatible con la institucionalidad comunitaria.
- [103]. En consecuencia de todo lo anterior, la medida ecuatoriana desnaturaliza el objeto de la Decisión 837, reemplazando el derecho comunitario de libre tránsito y libertad de operación por un privilegio administrado discrecionalmente a través de listados restrictivos. Esta conducta configura un incumplimiento abierto de las obligaciones sustanciales y operativas contenidas en los artículos 3, 13, 14, 15, 16 y 33 de la Decisión 837.

6. La medida incumple el artículo 3 de la Decisión 502

- [104]. El artículo 3 de la Decisión 502 establece:

Artículo 3.- *Los objetivos específicos de la presente Decisión son los siguientes:*

- a) Implantar un sistema eficiente e integrado de gestión y control de los tráfico bidireccionales que se canalizan por los pasos de frontera;*
- b) Evitar la duplicidad de trámites y registros a la salida e ingreso de personas, equipajes, mercancías y vehículos por carretera de los Países Miembros;*
- c) Efectuar en los CEBAF el registro de la información sobre el flujo de personas, equipajes, mercancías y vehículos, en forma uniforme y sistematizada por medios informáticos, para contar con estadísticas oportunas y confiables;*
- d) Promover el transporte internacional directo de pasajeros y mercancías por carretera, facilitando el flujo expedito de personas, equipajes, mercancías y vehículos por los pasos de frontera, aplicando procedimientos que eviten demoras, así como pérdidas y averías de los equipajes y las mercancías;*

e) Establecer un sistema permanente de información y capacitación en frontera para funcionarios, prestatarios de servicios complementarios y usuarios, sobre las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y las normas binacionales que regulan el flujo de personas, equipajes, mercancías y vehículos por los pasos de frontera, incluyendo la publicación de manuales y guías binacionales de información al público; y

f) Otros que acuerden bilateralmente los Países Miembros⁴¹.

[105]. La infraestructura fronteriza compartida entre los Países Miembros no constituye una simple instalación dirigida a la gestión sometida al arbitrio unilateral de un solo Estado. De conformidad con la Decisión 502, los CEBAF operan bajo una lógica de gestión conjunta, motivo por el cual, conforme al artículo 3 de dicha norma, el cierre, la creación, el traslado, la modificación o la supresión de estos debe realizarse ineludiblemente mediante acuerdos específicos entre los Países Miembros involucrados.

[106]. El CEBAF San Miguel constituye un mecanismo institucional de cooperación fronteriza incorporado al ordenamiento comunitario mediante la Resolución No. 1541 de la SGCAN y acuerdos bilaterales previos. En observancia de los objetivos específicos señalados en el artículo 3 de la Decisión 502, y al ser su establecimiento fruto de un acuerdo exclusivamente bilateral, ningún País Miembro tiene la potestad jurídica para cerrar o suspender por decisión unilateral el funcionamiento de este paso fronterizo.

[107]. No obstante, la República del Ecuador procedió a la clausura unilateral y al bloqueo físico de este punto desde el 25 de diciembre de 2025, contradiciendo frontalmente el ordenamiento jurídico andino. Lejos de rectificar esta vía de hecho, el Estado ecuatoriano pretendió revestir de legalidad el bloqueo mediante la expedición de la Nota Verbal Nro. MREMH-SSRV-2026-0001-N, modificando y condicionando unilateralmente el funcionamiento del CEBAF San Miguel mediante la imposición de listados cerrados y horarios restrictivos.

[108]. Esta actuación materializa una desnaturalización del régimen fronterizo comunitario. Someter el uso de una infraestructura de carácter binacional a "habilitaciones controladas" dictadas unilateralmente por Ecuador, sin mediar acuerdo específico con Colombia, destruye el esquema de gestión conjunta.

⁴¹ Decisión 502. Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) en la Comunidad Andina. Artículo 3.

[109]. Así lo reconoció la SGCAN mediante la Resolución No. 2590 del 14 de mayo de 2026, mediante la cual calificó la medida ecuatoriana como una restricción al comercio en los términos del artículo 73 del AC:

[162] Los pasos de frontera habilitados en los Países Miembros de la Comunidad Andina no son infraestructuras de gestión exclusivamente nacionales. Conforme a la Decisión 502 el establecimiento, traslado, modificación o supresión de los CEBAF se realizará mediante acuerdos específicos entre los Países Miembros, los cuales forman parte del ordenamiento jurídico comunitario y deben ser notificados a la SGCAN.

[163] En consecuencia, y en observancia de los objetivos específicos señalados en el artículo 3 de la Decisión 502, el establecimiento del CEBAF es exclusivamente un acuerdo bilateral, por tanto, ningún País Miembro podría, por decisión unilateral, cerrar o suspender el funcionamiento de un paso fronterizo binacional sin incurrir en una violación directa del ordenamiento jurídico andino.

[164] El CEBAF San Miguel constituye un mecanismo institucional de cooperación fronteriza que integra funciones de control migratorio, aduanero y de seguridad, bajo un esquema de gestión conjunta entre las autoridades de ambos países. La operación conjunta inició en el mes de abril de 2013 en el marco de los compromisos asumidos por la Comunidad Andina y los acuerdos bilaterales suscritos entre la República de Colombia y la República del Ecuador, con el propósito de facilitar el tránsito de personas, vehículos y mercancías, garantizando al mismo tiempo la seguridad y el cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional aplicable.

[165] Sobre el caso particular, la Resolución Nro. SENAE-DGN-2014-0440-RE89 de 2014 señala en su artículo 20 que el petróleo debe cruzar la frontera por los "puntos habilitados ordinariamente para el cruce de frontera". El CEBAF San Miguel era, hasta el 24 de diciembre de 2025, un punto ordinariamente habilitado, regulado mediante acuerdo binacional e incorporado al ordenamiento comunitario a través de la Resolución 1541 de la SGCAN. Al clausurarlo unilateralmente, la República del Ecuador no

solo contradice el Acuerdo de Cartagena, sino que también la Decisión 502⁴².

[110]. En consecuencia, al alterar unilateralmente las reglas de operación, acceso y funcionamiento del paso fronterizo, la República del Ecuador vulneró de manera directa las obligaciones consagradas en el artículo 3 de la Decisión 502 de la Comunidad Andina.

7. La medida incumple el artículo 4 del TCTJCA

[111]. El artículo 4 del TCTJCA dispone:

Artículo 4.- *Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.*

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación⁴³.

[112]. Sobre este particular, el TJCA ha dicho que:

(...) el artículo 5 [actual artículo 4] del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario (...); y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación.

Por la primera obligación, de hacer, los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena se vinculan jurídicamente al compromiso de adoptar toda clase de medidas -sean legislativas, judiciales, ejecutivas, administrativas o de cualquier otro orden- que contengan manifestaciones de voluntad del Estado expresadas en leyes, decretos, resoluciones, decisiones, sentencias o en general actos de la administración, destinados a garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario. Por la segunda obligación, de no hacer, las mismas autoridades deben

⁴² SGCAN. Resolución No. 2590 del 14 de mayo de 2026. Párrafos 162-165.

⁴³ Decisión 472. Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Artículo 4.

abstenerse de adoptar toda medida de la misma índole que pueda contrariar u obstaculizar dicho ordenamiento.

Las obligaciones previstas en el artículo 5 [actual artículo 4] del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1 del mismo, trátase de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo⁴⁴. (SFT).

- [113]. Como corolario de todo lo expuesto, en tanto la República del Ecuador ha adoptado y mantenido la medida contenida en la Nota Verbal Nro. MREMH-SSRV-2026-0001-N, la cual fue calificada como una restricción al comercio por la SGCAN mediante la Resolución No. 2590 del 14 de mayo de 2026 y, además, resulta abiertamente contraria al ordenamiento jurídico andino; se ha trasgredido el compromiso consignado en el artículo 4 del TCTJCA.

IV. CONCLUSIONES

- [114]. La medida contenida en la Nota Verbal MREMH-SSRV-2026-0001-N constituye una restricción al Programa de Liberación, al condicionar la importación de "crudo colombiano" por el paso fronterizo San Miguel, a que el gobierno ecuatoriano autorice las personas y los vehículos que transportarán este producto.
- [115]. La SGCAN, mediante la Resolución No. 2590 del 14 de mayo de 2026, publicada en la Gaceta Oficial No. 5759 del Acuerdo de Cartagena, resolvió calificar la medida contenida en la Nota Verbal Nro. MREMHSSRV-2026-0001-N del 1 de enero de 2026 y adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana - Subsecretaría de Soberanía y Relaciones Vecinales de la República del Ecuador, como una restricción al comercio subregional andino, conforme a lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena.

⁴⁴ TJCA. Proceso 6-IP-1993. Interpretación Prejudicial del 25 de febrero de 1994 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 150 del 25 de marzo de 1994.

[116]. La República del Ecuador incumple el ordenamiento jurídico de la CAN debido a que:

- (i) Viola el Programa de Liberación de la Comunidad Andina (artículo 72, 76 y 77 del AC).
- (ii) Desatiende los principios fundamentales de la Comunidad Andina (artículos 1 y 2 del AC), en tanto la medida de la República de Ecuador amenaza con desintegrar los propósitos fundamentales que soportan la institucionalidad de la CAN.
- (iii) Infringe los compromisos consignados en el artículo 3, literal i) y el artículo 104 del AC, en tanto obstaculiza la integración física en la subregión.
- (iv) Quebranta el principio de NMF contenido en el artículo 139 del AC, al aplicar un trato discriminatorio a la República de Colombia.
- (v) Transgrede los compromisos dispuestos en los artículos 3, 13, 14, 15, 16 y 33 de la Decisión 837.
- (vi) Vulnera los compromisos consagrados en el artículo 3 de la Decisión 502.
- (vii) Viola la obligación consignada en el artículo 4 del TCTJCA.

V. SOLICITUD

[117]. Por lo expuesto, comedidamente se solicita a la Secretaría General de la Comunidad Andina, en concordancia con lo establecido en el artículo 21 de la Decisión 623, lo siguiente:

PRIMERO: Emita el Dictamen que resuelve este reclamo, de conformidad con los términos establecidos en por los artículos 16 y 20 de la Decisión 623.

SEGUNDO: Dictamine el incumplimiento de la República de Ecuador de sus obligaciones derivadas de los artículos 1, 2, 3 (literal i), 72, 76, 77, 104 y 139 del Acuerdo de Cartagena; 3, 13, 14, 15, 16 y 33 de la Decisión 837; 3 de la Decisión 502; y 4 del TCTJCA.

TERCERO: Solicitar a Ecuador que, en adelante, se abstenga de imponer medidas de esta naturaleza o de efecto equivalente o similar en contra de los demás Países Miembros, en especial, Colombia.

CUARTO: Teniendo en cuenta que a través de la Resolución No. 2590 del 14 de mayo de 2026, la SGCAN calificó la medida de Ecuador como una restricción y

le otorgó un plazo de 10 días hábiles para retirarla, y considerando la urgencia de este caso, indique a la República del Ecuador que cuenta con un plazo de quince (15) días calendario para que informe sobre las acciones adelantadas para corregir el incumplimiento del ordenamiento comunitario, de conformidad con el literal g) del artículo 21 de la Decisión 623.

VI. PRUEBAS

[118]. Se adjuntan en formato digital las siguientes pruebas:

Nº DE PRUEBA	PRUEBA	NOMBRE ARCHIVO
PRUEBA 1	Nota Verbal número MREMH-SSRV-2026-0001-N del 1º de enero de 2026.	Prueba 1
PRUEBA 2	Informe técnico-jurídico justificativo de la medida presentado por la República del Ecuador.	Prueba 2
PRUEBA 3	Observaciones de Colombia respecto del informe técnico-jurídico justificativo de la medida allegado por la República del Ecuador.	Prueba 3
PRUEBA 4	Resolución No. 2590 de la SGCAN del 14 de mayo de 2026, publicada en la Gaceta Oficial No. 5759 del Acuerdo de Cartagena.	Prueba 4

VII. ANEXOS

[119]. Se adjunta en formato digital los siguientes anexos:

Nº DE ANEXO	ANEXO	NOMBRE ARCHIVO
ANEXO 1	Poder para actuar.	Anexo 1
ANEXO 2	Cédula de Ciudadanía Carlos Alberto Rojas Carvajal.	Anexo 2
ANEXO 3	Tarjeta Profesional de Abogado Carlos Alberto Rojas Carvajal.	Anexo 3

ANEXO 4	Resolución No. 1472 del 22 de noviembre de 2024, en la cual se hace el nombramiento de Carlos Rojas como Jefe de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales.	Anexo 4
ANEXO 5	Presidencia de la República. Decreto número 623 del 4 de junio de 2025, <i>"por medio del cual se termina un encargo interinstitucional y se realiza un nombramiento ordinario"</i> .	Anexo 5

VIII. NOTIFICACIONES

[120]. Recibiré notificaciones en la Calle 28 No. 13 A – 15, piso 1, Edificio Centro de Comercio Internacional, de la ciudad de Bogotá D.C., Colombia, en las cuentas de correo electrónico info@mincit.gov.co y crojas@mincit.gov.co

Respetuosamente,



CARLOS ALBERTO ROJAS CARVAJAL

Jefe de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
CC. 86.045.558 de Bogotá D.C.
TP. 109.641 del Consejo Superior de la Judicatura

Elaboró: Sergio Morillo Mora.
Revisó: Carlos Alberto Rojas Carvajal.
Aprobó: Carlos Alberto Rojas Carvajal.